

[illegible]

lo que a

esta anu
e Apelaci
la sus

de nuev
e impugna

e ratificó
como
requirió p
ncia; mie

a instanc

carácter
por la
sta a qui
tribunal

innecesario
476 del
de no hab

mparecen



VII. Lista del asunto. El presente asunto se incluyó en la lista

Consideraciones:



Cuarta. Antecedentes de la resolución recurrida.

• Mediante acuerdo de **diez de mayo de dos mil veintitrés**, con fundamento en los artículos 153 a 171 y Quinto Transitorio –de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis- del Código Nacional de Procedimientos Penales, se admitió a trámite el “**incidente de cese o sustitución**” de la medida cautelar de prisión preventiva, promovido por la Defensora Pública Federal de *****

****, dentro de la causa penal 182/2022, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México –actualmente 36/2024, del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México- respecto de los siguientes delitos:

a) Violación a la Ley Federal contra la delincuencia organizada previsto en el artículo 2, fracción V y sancionado en el diverso 4, fracción II, inciso b).

b) Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido en agravio de *****, previsto en el artículo 366, fracción I, inciso a) y fracción II, incisos c) y d) del Código Penal Federal.

• Se dio vista a las partes por el plazo de tres días y se ordenó al Titular de la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso de la Guardia Nacional, para que en el plazo de cinco días hábiles, emitiera evaluación de riesgo con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva de la procesada *****

- En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el juez de los autos concedió prórroga de cinco días, contados a partir del diecinueve de ese mes y año, para dar cumplimiento a lo solicitado.

- Así, por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio con terminación 1235/2023, suscrito por

ra con la t
etición de
n fecha y h
da cautela
dos mil ve
a Director
a Acatitla
ada con la
a conduct
ativo, hist
social, estu
como estu
r datos de
del ocho
la audien
titución- in
el inciden
cia corres
e *****
entación e
)):)

- el incidente
cia corres
e *****
entación e
)):
de la aud
preventiv
la causa p
osa ya
e Interam
entes.
es que imp
dios de ca
coprocesa
no sería
de la peti
víctimas.
ista la in

no sería
de la peti
víctimas.

- no sería
de la peti
víctimas.



- Por su parte la fiscalía esgrimió la siguiente argumentación en cuanto a la petición de cese de la medida (19:00:00 a 01:21:00):

- Solicitó se declarara infundada e improcedente la petición de la defensa, toda vez de que no han variado las condiciones para la justificación e imposición de la medida cautelar de prisión preventiva.
- Citó la jurisprudencia 32/2022, en la que se señalan los puntos relativos para justificar la prolongación de la prisión preventiva consistentes en (i) la complejidad del asunto, (2) la actividad procesal de la interesada, (3) la conducta de las autoridades y un cuarto elemento, que es (4) acreditar o justificar la necesidad de continuar con la medida cautelar de prisión preventiva vigente.
- En cuanto a las anteriores consideraciones, señaló que la causa era **compleja** derivado de los hechos que dieron origen a dicho proceso, así como la naturaleza de los delitos por los que se dictó formal prisión a la incidentista, los cuáles son catalogados de alto impacto social, por lo que **representan un grado de dificultad probatorio** superior al de otros asuntos, ya que intervienen diversos implicados, víctimas del delito, defensores y asesores jurídicos.

Además de que se han desahogado diversas probanzas, como testimonios, periciales, documentales, inspecciones judiciales, lo cual ha generado que la causa se componga de 51 tomos.

- La incidentista ha ejercido de forma constante y activa **una actitud procesal**, ya que ha presentado múltiples probanzas, ha recurrido determinaciones, presentado medios ordinarios de defensa, lo que ha conllevado a la prolongación del proceso.
- La **conducta de las autoridades**, es decir, de todos los titulares que los diversos juzgados de distrito que han conocido de la causa ha sido profesional y objetiva porque las actuaciones se han desahogado dentro del término legal, asimismo, ha ordenado las diligencias necesarias para el desahogo de las diversas peticiones, pruebas y demás actividades procesales, en este caso, para perseguir la finalidad del proceso.

- consideró
n la med
e garanti
a se pue
levaría u
s integra
isión pre
organiza
se y la im
a detenc
emitido
ate, el ju
preventiv
de la med
ecisó que
ez meses
toda vez
dos mil
e resolvió
que la raz
l diecisie
ada infun
rador—, la
anscurrid
s mil diec

ate, el ju
preventiv
de la med
ecisó que
ez meses
toda vez
dos mil
e resolvió
que la raz

dieciséis
ada infun
ador—, la
anscurrid
s mil diec



Sin que pueda tomarse en cuenta –añadió el juzgador- lo relatado por el Ministerio Público, en cuanto a que existieron circunstancias particulares que influyeron en la dilación procesal del asunto, como el hecho de que la causa penal ha cambiado de juzgado de Distrito en diversas ocasiones, así como la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19, toda vez que dichos factores no le eran atribuibles a la imputada.

En consecuencia, y tomando como base, primordialmente, la falta de justificación de la fiscalía en cuanto a la complejidad particular que entraña el asunto, **decretó el cese de la prisión preventiva en favor de la procesada.**

Acto seguido, el *a quo* concedió el uso de la voz a las partes para el efecto de discutir acerca de la imposición de una o varias medidas cautelares distintas a la prisión preventiva “oficiosa”, previamente cesada.

Una vez escuchadas a las partes procesales, el juez de Distrito resolvió imponer, a petición de la fiscalía, la prisión preventiva en su “vertiente justificada” contra *****.

Así lo estimó procedente, en virtud de que la defensa dejó de acreditar “el arraigo” de la implicada, pues consideró que no adujo estabilidad laboral; además que, de la investigación aparecieron tres posibles domicilios en donde podría habitar, sin que se tuviera certeza de uno solo; que del estudio de riesgo se obtuvo una calificación de “riesgo medio”; y finalmente, no se acreditó que fuera cuidadora única de su hija, en virtud de que no se aportó prueba idónea que probara la defunción del padre de la niña.

En suma, el juzgador del proceso sostuvo que, **al existir riesgo fundado de sustracción**, resultaba procedente la solicitud de la fiscalía, por lo que impuso, como medida cautelar, **la prisión preventiva justificada contra *******.

Determinación que constituye la materia de estudio del presente recurso de apelación.

Quinta. Agravios.

La Defensora Pública Federal hizo valer los siguientes motivos de inconformidad:



2. Fue errónea la resolución del juez ya que las personas imputadas tienen derecho a que la prisión preventiva que se les imponga no sea superior a dos años y, si cumplido este término, no se ha pronunciado sentencia, serán puestas en libertad de inmediato, sin que exista la posibilidad de volver a imponer la prisión preventiva, ahora justificada, como aconteció en la especie.

Es **fundado** el **agravio** sintetizado como **2** y suficiente para revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición de la audiencia de revisión de medida cautelar.

En efecto, como se advierte de los antecedentes narrados en la presente ejecutoria, el juzgador recurrido, una vez escuchadas a las partes, decretó el cese de la prisión preventiva, en favor de *****
***** ***** , pues consideró que el Ministerio Público no justificó de manera adecuada la prolongación de la medida cautelar en el caso concreto.

No obstante, de manera errónea consideró que al cesar la prisión preventiva “oficiosa” estaba en posibilidad de imponer, como diversa medida cautelar, la prisión preventiva pero ahora “justificada”, sin advertir que el derecho fundamental reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hace distinción alguna entre ambas formas de imposición –oficiosa y justificada-, sino que, **constriñe la prerrogativa fundamental a no**

[illegible]

artado B,
acusatorio y
licción, con
ona imputad
ngarse la p
defensores
a de respon
podrá exc
a ley al de
á superior
rcicio del d
término no
puesto en
que ello ob
que impon
ción.

e la enton
Nación, al
pretación c
diversos p
quella pre
eventiva
de que la
vada del e
ón válida
defensa,
uración de

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

ona imputada
ngarse la p
defensores
a de respor
podrá exc
a ley al d
á superior
rcicio del d
término no
uesto en
o que ello ob
que impon
ción.

de la entonces
Nación, al
pretación de
diversos p
quella pre
preventiva
de que la
vada del e
ón válida
defensa,
uración de

(...)."'

ión válida
defensa,
duración de

duración de

¹ Sesión de nueve de febrero de dos mil veintidós, resuelto por mayoría de cuatro votos.



Por lo tanto, si bien es natural que el plazo de la duración de la prisión preventiva pueda prolongarse a partir de la actividad procesal de las partes, dicho lapso no puede extenderse sin estar sujeto al escrutinio judicial, el cual tendrá por objeto validar, si es el caso, la privación de la libertad de la persona durante el proceso, de forma excepcional.

Así, dicho alto tribunal insistió en que del texto constitucional se advertía el derecho fundamental, reconocido como regla, de que la prisión preventiva impuesta a las personas imputadas no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años.

Y, añadió la extinta Primera Sala que, lo anterior, con la salvedad de que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa. **Pero, si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, dicha persona será puesta en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer diversas medidas cautelares** (párrafo 63 de la sentencia dictada en el amparo en revisión 315/2021 citado).

En conclusión, la histórica Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó que la duración de la prisión preventiva está sujeta a límites estrictos derivados directamente del texto constitucional, al **reconocer como regla general que ninguna persona puede permanecer privada de su libertad por más de dos años sin sentencia**, salvo que la prolongación se justifique plenamente por el ejercicio (legítimo) del derecho de defensa.

...unto, (ii)
...ucta de la

na Corte
y propor
gación se
que la r
e salvag
vide que

en la esp
a fiscalía
ue la pro
siva; ello
ortar ele
de inve
a pendie
resentado
entiva.

ente que
n el que
ente cesa
en perjuic
al evaluac
camente
a justifica

postura,
que la pe



Incluso, el desacierto advertido en la resolución recurrida se refleja en que el juzgador de la causa reconoció la transgresión, en perjuicio de la procesada, del derecho fundamental previsto en el párrafo segundo de la fracción IX del apartado B del artículo 20 constitucional; esto es, aquel que dispone que el tiempo excesivo durante el cual una persona permanece sujeta a prisión preventiva debe encontrarse plenamente justificado. En ese contexto, la forma correcta de restituir a la imputada en el goce de dicha prerrogativa no consistía en reabrir el debate sobre la imposición de la misma medida cautelar, **sino en decretar su inmediata libertad** y, en su caso, analizar la procedencia de imponer una o varias medidas cautelares distintas que no implicaran su reclusión.

En efecto, desde una perspectiva técnico-jurídica, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada no constituyen dos medidas cautelares distintas, sino una misma figura jurídica —la prisión preventiva— cuya diferencia radica exclusivamente en la forma y fundamento de su imposición. En ambos supuestos, el efecto material y procesal es idéntico: la restricción de la libertad personal de la imputada, antes de dictarse sentencia definitiva. Por lo que válidamente puede afirmarse que la distinción entre “oficiosa” y “justificada” obedece únicamente a la fuente que habilita su imposición: en el primer caso, la previsión constitucional directa establecida en el artículo 19 de la Carta Magna, y en el segundo, la solicitud razonada del Ministerio Público conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En ese plano explicativo, no puede sostenerse que el órgano jurisdiccional, una vez decretado el cese de la prisión preventiva,

secretar l
clarar ab
de un
rendiera
y, en cor
eventiva,
cada—,
cos efect
se insis
e autoriz
s consec
s diccion
ido los l
no esta
bajo la c
o equiva
entales a

acordes
y de Trak
d de Mé
erivó la ju

**SIÓN PRE
NTRA LA
MINISTE
O DE SU C**

os penales
oficiosa.
había t

por unanimid

16



Por tanto, el Ministerio Público debe acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar lo anterior actualiza el cese de la prisión preventiva oficiosa y da lugar a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, distintas a la prisión

undado el
procede
del proced
elebre au
artículo 5° f
mientos
ismo orde
e cese de
eria del p
ada.
posición de
a **inmedi**
o que hac
Primero
)*
de la proc
as a la p
des.
n, resuelv
su caso, d
do, se
elve:

undado el
procede
del proced
elebre au
artículo 5° f
mientos
ismo orde
e cese de
eria del p
ada.
posición de
a **inmedi**
o que hac
Primero
)*
de la proc
as a la p
des.
n, resuelv
su caso, d
do, se
elve:

- undado el
, procede
del proced
elebre au
artículo 5° f
mientos
ismo orde
e cese de
eria del p
ada.
posición de
a **inmedi**
o que hac
Primero
)*
de la proc
as a la p
des.
n, resuelv
su caso, o
- do, se
elve:

undado el
, procede
del proced
elebre au
artículo 5° f
mientos
ismo orde
e cese de
eria del p
ada.
posición de
a **inmedi**
o que hac
Primero
)*
de la proc
as a la p
des.
n, resuelv
su caso, o

do, se
elve:

undado el
, procede
del proced
elebre au
artículo 5° f
mientos
ismo orde
e cese de
eria del p
ada.
posición de
a **inmedi**
o que hac
Primero
)*
de la proc
as a la p
des.
n, resuelv
su caso, o

do, se
elve:

undado el
, procede
del proced
elebre au
artículo 5° f
mientos
ismo orde
e cese de
eria del p
ada.
posición de
a **inmedi**
o que hac
Primero
)*
de la proc
as a la p
des.
n, resuelv
su caso, o

do, se
elve:

undado el
, procede
del proced
elebre au
artículo 5° f
mientos
ismo orde
e cese de
eria del p
ada.
posición de
a **inmedi**
o que hac
Primero
)*
de la proc
as a la p
des.
n, resuelv
su caso, o

do, se
elve:



Único. Se **modifica** la determinación recurrida y se ordena la **reposición** del procedimiento, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese en términos de ley, privilegiándose el uso de medios electrónicos.

Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y sistema estadístico de este tribunal; expídanse las copias de ley que sean necesarias y con copia auténtica de esta ejecutoria remítanse los autos al juzgado de su procedencia.

En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena capturar la presente resolución en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, por **mayoría de votos** de la Magistrada **Taissia Cruz Parcero** (ponente) y de la Secretaria en funciones de Magistrada **Virginia Jácome Planté**, contra el voto del Magistrado **Joel Blanno Castro** (Presidente) quien formula voto particular.

Firman electrónicamente el magistrado, la magistrada y la secretaria en funciones de magistrada, así como el secretario de tribunal, quien actúa como Asistente de Constancias y Registro de Segunda Instancia, para constancia.

[Firma electrónica]
Joel Blanno Castro
Magistrado Presidente

[Firma electrónica]
Taissia Cruz Parceró
Magistrada Ponente

[Firma electrónica]
Virginia Jácome Planté
Secretaria en funciones de Magistrada

[Firma electrónica]
Juan Alexis Rojas Hernández
Asistente de Constancias
y Registro de Segunda Instancia.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JOEL BLANNO CASTRO, EN RELACIÓN CON TOCA PENAL ***-SPA.**

En sesión ordinaria virtual de seis de noviembre del año en curso, el Pleno de este Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito resolvió, por mayoría de votos, que procede modificar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que la autoridad recurrida, celebre audiencia de revisión de medida cautelar, en términos del artículo 5° transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en el plazo establecido en el diverso 162 del mismo ordenamiento, en la que:

“1. **Reitere** la determinación de cese de la prisión preventiva pues, al no haber sido materia del presente recurso, dicha resolución debe quedar intocada.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

2. Deje **insubsistente** la imposición de la prisión preventiva “justificada”.
3. En consecuencia, decrete la **inmediata libertad** de *****,
***** ***, **únicamente** por lo que hace a la causa penal
182/2022 del ahora Juzgado Primero de Distrito en Materia
Penal en la Ciudad de México*.
4. Someta a debate la sujeción de la procesada a una o diversas
medidas cautelares, **distintas a la prisión preventiva, en
cualquiera de sus modalidades**.
5. Con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente, con
perspectiva de género y, en su caso, de interés superior de la
infancia.”

Sin embargo, el suscrito respetuosamente disiente del voto mayoritario, fundamentalmente por dos razones. La primera es porque al tratarse de un incidente de cese de prisión preventiva, solicitado en el sistema tradicional o mixto, su trámite debió efectuarse conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, lo cual incluso ha sido criterio reiterado de este tribunal en su anterior integración.

En efecto, en la página trece del proyecto, con base en el artículo 20, apartado B, fracción IX, segundo párrafo⁴ (reformado el 18 de junio de 2008) y la ejecutoria del amparo en revisión 315/2021 de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la afirmación de que por regla general ninguna persona puede permanecer privada de su libertad por más de dos años sin sentencia.

Empero, el asunto deriva del sistema mixto o tradicional, por lo que no es aplicable el mencionado artículo 20 constitucional reformado en dos mil ocho (sistema acusatorio), sino el vigente en la época de los hechos (dos mil seis), el cual **no prevé que la prisión**

⁴ IX. [...] La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en **ningún caso será superior a dos años**, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

preventiva deba durar sólo dos años, como se ve de la redacción literal.

“Artículo 21. En todo proceso de orden penal, el inculcado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: [...] X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. **Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motivare el proceso.** [...]

De suerte tal que tratándose de incidentes de cese de prisión preventiva que devienen del sistema tradicional, no resulta aplicable la referida fracción IX, apartado B, del artículo 20 constitucional, reformado en dos mil ocho. Además, el citado amparo en revisión 315/2021 analizó un asunto del sistema acusatorio, por lo que para el caso únicamente resulta orientador, pues se ha considerado que para asuntos del sistema tradicional, en los cuales se solicita el cese de medida cautelar, es aplicable la ejecutoria del amparo en revisión 205/2014 de la citada Primera Sala.

La segunda razón es que el proyecto aprobado se apoyó básicamente en la ejecutoria del amparo en revisión 315/2021, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se **interpretó** procedente revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa que prevé el artículo 19 constitucional, en el plazo de dos años a que se refiere la fracción XI, Apartado B, del artículo 20 de la Constitución y, en su caso, determinar si cesa o se prolonga.

Sin embargo, a consideración del suscrito, con la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Norma Fundamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, actualmente esa interpretación está **vedada**, atendiendo a su propia redacción, que textualmente indica:



“Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando **prohibida cualquier interpretación** análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.”

De manera que si la prisión preventiva oficiosa se ha determinado ahora de una manera más específica en la Constitución, no es posible abordar su cese con base en criterios jurisprudenciales que tuvieron su origen cuando el marco normativo era otro, porque actualmente por disposición expresa, no puede realizar interpretación diversa de lo que ha establecido el Constituyente con relación a la prisión preventiva oficiosa, conforme a las normas que las regulan.

Por lo que desde mi punto de vista, en todo caso, este tribunal debió **revocar** la determinación apelada y en reasunción de jurisdicción, **desechar** el incidente planteado.

Por las razones expuestas, emito este voto particular.

Magistrado

Joel Blanno Castro

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, ACTUANDO COMO ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE SEGUNDA INSTANCIA, HACE CONSTAR QUE: ESTA HOJA ES PARTE FINAL DE LA EJECUTORIA PRONUNCIADA EN SESIÓN DE ESTA FECHA, EN EL TOCA PENAL *****-SPA.

[FIRMA ELECTRÓNICA]
JUAN ALEXIS ROJAS HERNÁNDEZ.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

132209348_4343000038525536009.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE						
Nombre:	Juan Alexis Rojas Hernández			Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA						
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.02.72			Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/11/25 21:02:24 - 06/11/25 15:02:24			Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256					
Cadena de firma:	27 c9 6e b5 f4 68 31 82 7c 54 1d a2 f9 46 9e ed d9 04 07 e8 17 fb 5d e5 b2 5b 94 5c aa 82 12 00 92 fe b9 da d1 a2 cd 67 b7 57 fb 7d 3a 8d 0a d4 f0 c2 6d 59 68 ea ab 3b 59 56 59 4a d0 a3 21 ba b9 59 ae d1 75 bc ca a1 1c 1c c1 6f f5 40 8e a3 b2 9a 29 61 72 5f 24 56 5d d5 4c d0 f2 c0 58 99 68 a2 f4 58 22 1f b6 65 ad 7f 19 2c 98 30 31 ae da 52 2a 3e 70 7d c0 52 f9 fb e1 67 2c a6 3c 5a e7 4b 9a 73 09 46 23 9e 77 96 63 da 3b df c0 c7 28 14 a3 52 d0 c6 66 85 13 7e fb e5 3c 38 dc 27 c5 38 28 16 21 14 3e fb 6e 21 a2 fc 0f d5 46 dc ac d7 76 1c 11 be 7b 68 a5 98 1e 0e 17 b1 70 86 cf 89 38 16 c8 75 6e d8 32 b5 c8 e0 8a f2 4b 7c ed 22 38 18 6f 08 89 25 d6 cb 77 5c 0e 2c 5c df 4e 51 35 48 9b 04 e7 65 9b 2d 5a c6 8e eb 4c 70 9f 6a 5d 4e 15 c3 e1 95 b4 d9 c9 a0 3e 9f 0e c1					
OCSP						
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/11/25 21:02:25 - 06/11/25 15:02:25					
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal					
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal					
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.02.72					
TSP						
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/11/25 21:02:25 - 06/11/25 15:02:25					
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal					
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal					
Identificador de la respuesta TSP:	77593947					
Datos estampillados:	l1x/GTzQLrkPNbqaE6A1hbEC36E=					

[illegible]



א
ב
ג
ד



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	VIRGINIA JACOME PLANTE		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.95.60		Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	06/11/25 21:29:07 - 06/11/25 15:29:07		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	5e 34 92 e2 4d 45 58 32 da 8d ea 8d 95 a9 f6 09 34 c3 9d c8 dc f1 ab 2b ae d5 32 e4 28 d0 71 58 62 4e a4 06 0d 16 cc 19 2b a8 ca 2e 25 c7 9a 28 a4 96 60 54 ef 6d 7a 1e ba 72 d4 7c bc 1d 2b 12 ea 14 e9 13 4f d7 68 df 6f 64 4b cf 22 61 2c e6 d5 a9 c5 e7 6e 2f cb 29 d4 88 ea 0f 9b cf ac 67 05 99 99 54 10 4c fb 42 f5 25 e4 96 a0 6f c6 86 38 91 11 eb 64 0c 7c f6 d8 b9 5a ec f0 2f 12 2a d9 5e 8e 31 23 3f 77 84 1e 6d 47 27 c5 7f fb 76 55 f6 be cd 6e d4 a3 19 f4 88 93 a7 dd 76 55 32 90 22 85 bd 93 4b 85 1c 7a 77 f1 49 70 32 fa 68 d7 f4 56 22 82 d0 fe 95 0f cc 74 29 3c 1d de 7f be 5e db 95 bc 37 2c 26 64 9f 0b d6 f7 9e 5c cf 8b d0 69 a0 7b aa ba bb 4f 8c 24 d9 6c 88 38 97 e4 19 d5 18 82 e9 c4 0d d5 47 2a 18 0c 25 b2 2a 9d a3 af b4 a5 b5 43 73 38 f1 56 2c 84 e8 64 33			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	06/11/25 21:29:07 - 06/11/25 15:29:07			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.95.60			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	06/11/25 21:29:08 - 06/11/25 15:29:08			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	77623208			
Datos estampillados:	al7aycGkiz+lcwxMaPGuFt8chv4=			

El seis de noviembre de dos mil veinticinco, el licenciado Juan Alexis Rojas Hernández, Secretario(a), con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.